

COMENTARIOS AL ACONTECER EN EL MUNDO

EL TERRITORIO LIBRE DE TRIESTE: CUESTIÓN ZANJADA

Contadas veces el tiempo resuelve un problema político. Lo pudre, como sucede en Chipre, o lo consolida, como en el Cercano Oriente, cuando no lleva a calificar de solución el propio problema. Tal es el caso del llamado Territorio Libre de Trieste, cuestión que ha estado coleando desde que a finales de la II Guerra Mundial, a impulsos de su entusiasmo bélico, los yugoslavos invadieron y ocuparon la parte italiana de la ribera oriental del Adriático, a despecho de la cobeligerancia de Italia, aliada de los aliados, luego de Yugoslavia, por declarar la guerra a Alemania el 13 de septiembre de 1943.

Esa región italiana de la ribera oriental del Adriático era la antigua Venecia Julia—Marca Julia para los yugoslavos—. Había entrado a formar parte de Italia como consecuencia de la guerra austro-italiana de 1915-1918, hecho ratificado jurídicamente por los tratados de Versalles (1919), Rapallo (1920), Roma (1924) y, finalmente, de Nettuno (1925). Todos ellos fijaban los límites orientales de Italia en el Adriático, incluyendo en el ámbito de su soberanía la península de Istria y diversas islas. La ocupación por Yugoslavia de esa región adriática dio al traste con el andamiaje jurídico que sustentaba la soberanía italiana. Los hechos tenían más fuerza que los textos, originando peliagudos problemas y difíciles discusiones al negociarse con Italia el tratado de paz del 10 de febrero de 1947. Después de muchos cubileteos se optó por una fórmula de compromiso que permitió a Yugoslavia entrar en posesión de la península de Istria y diversas islas del Adriático. Sólo quedó a salvo de su conquista, dada por buena en el tratado de paz, un remanente de la Venecia Julia al que se denominó Territorio Libre de Trieste, situado entre Duino, al Norte, y Cittanova, al Sur. Tampoco volvió a poder de Italia. Se le aplicó una curiosa solución salomónica: quedó partido en dos, la zona A administrada por los anglosajones y comprensiva del puerto

de Trieste —el tercero de Italia antes de la guerra— y la zona B administrada fiduciariamente por Yugoslavia y comprensiva de la ciudad de Capodistria. El resultado inmediato de esa partición fue que mientras Italia no podía intervenir en la zona A del Territorio Libre, si bien se viera obligada a sufragar el déficit administrativo, los yugoslavos actuaban sin cortapisas en la zona B. Aprovecharon tan favorable circunstancia para fomentar la emigración de italianos de su zona, o sea, de aquellos que seguían en su tierra natal después de las matanzas de «fascistas» subsiguientes a la II Guerra Mundial o no habían tomado parte en la primera oleada de emigrantes. De otra parte, fomentaron la instalación en la zona B de serbios y croatas. No hacían sino desempolvar la política practicada en tiempos por los Habsburgo para neutralizar el irredentismo italiano. Actualmente se calcula que los italianos residentes en esa zona oscilan entre 10.000 y 15.000, frente a unos 50.000 yugoslavos. Otra circunstancia favorable para los objetivos de Yugoslavia fue su estrepitosa ruptura con la URSS. Encandiló a los occidentales y los llevó a multiplicar concesiones y mimos con vistas a impedir la vuelta al redil moscovita de la desmandada oveja comunista. De ahí que sin querer desairar a Italia, miembro del Tratado del Atlántico Norte y de la OTAN, la tensión ítalo-yugoslava de 1953 desembocara en la Conferencia de Londres, convocada por los Estados Unidos y Gran Bretaña a fin de acordar las dos destempladas gaitas. La Conferencia, que finalizó en octubre de 1954, concedió a Italia la administración de la zona A, es decir, de Trieste y de su *hinterland*, pero mantuvo la zona B bajo la tutela de Yugoslavia. Teóricamente, los 340 kilómetros cuadrados de esa zona, cuya frontera está a sólo 10 kilómetros de Trieste, seguía siendo de soberanía italiana, pero provisionalmente administrada por Yugoslavia. En el ánimo de los negociadores anglosajones de la Conferencia de Londres, es de presumir que, liberado de su compromiso de administración de la zona A, la cuestión no tenía vuelta de hoja: andando el tiempo, la situación de hecho habría de convertirse en situación de derecho.

Y así ha sido. El 1 de octubre el Gobierno italiano dio a conocer a la Cámara de los diputados que, de conformidad con el acuerdo suscrito con Yugoslavia, Roma renunciaba a la zona B. El día siguiente, el Senado aprobó sin rechistar la cesión de esa parte de la Venecia Julia que durante treinta años había sido motivo de incesantes reclamaciones, reivindicaciones y declaraciones del Gobierno y de la mayoría de los italianos, incluyendo entre éstos el actual presidente del

Consejo de Ministros, Aldo Moro, que en 1970, siendo ministro de Asuntos Exteriores, no vaciló en echar a pique el anunciado viaje a Italia del presidente Tito al declarar con relación a la zona B que «el Gobierno italiano no tomaría en consideración ninguna renuncia a los legítimos intereses nacionales». Cinco años después, el señor Moro estima que donde dije digo, digo Diego.

Que el paso del tiempo y las cambiantes circunstancias hayan llevado al Gobierno italiano a una reconsideración de «los legítimos intereses nacionales» es extremo al que nada cabe objetar. Sin embargo, en los tiempos que vivimos no se da un «interés nacional» al estado puro, sin incidencia en los intereses de otros países, en particular de aquellos a los que se está vinculado por alianzas o tratados. Es el caso de Italia, miembro del Pacto Atlántico y de la OTAN y asimismo de la CEE, que con la cesión de la zona B puede plantear un interrogante de futuro en ambos ámbitos, singularmente en el primero. En efecto, el presidente Tito es un anciano que gasta sus últimas energías en mantener ensamblado ese rompecabezas que es la República Federativa de Yugoslavia, comprensiva de seis repúblicas correspondientes poco más o menos a otras tantas etnias y algunas minorías, como los albaneses de la provincia de Kosmet. No es aventurarse en demasía considerar la posibilidad, que no la hipótesis, de que muerto el ensamblador Tito, Croacia reanude sus esfuerzos para sacudirse la tutela de Belgrado, aparte de otros amagos de separatismo. De ser así, ante una eventual desintegración del sistema federativo, un ejército donde no parecen faltar los nostálgicos del prosovietismo podría acercarse a la URSS. Lo sorprendente sería entonces que la URSS se mostrara remisa ante la oportunidad de ampliar su influencia en áreas del Mediterráneo. Es de suponer que si la OTAN y el Pacto de Varsovia siguen, como ahora, velando las armas, no dejaría de ser muy enojoso para los países occidentales que la URSS pudiera contar con un importante punto de apoyo en el Adriático, que le permitiría proyectarse sobre el territorio de Trieste y la región industrial del Adriático del Norte, en tanto que el comunismo gana terreno en Italia a través de las urnas. Tan es así que, según rumores no confirmados oficialmente, como es lógico, el acuerdo de cesión es la resultante de conversaciones celebradas entre el presidente Tito y Berlinguer, secretario del Partido Comunista italiano. En todo caso, la aprobación del acuerdo por el Parlamento sólo ha tenido eco de protesta en círculos restringidos, lo cual pone de manifiesto el cambio sufrido por la opinión italiana, no ha mucho tan dispuesta a alzarse contra todo atentado a la inte-

gridad del territorio nacional. Por supuesto, los italianos de Trieste han expresado sus temores de verse supeditados a Yugoslavia, en particular en materia de tanta importancia como es el suministro de agua. Otro tanto acaece en Goricia. El Gobierno italiano ha dado seguridades de que el acuerdo prevé garantías que impidan perjuicios en razón de la cesión. Es de desear para los triestinos y los habitantes de Goricia y su región que esas garantías surtan efectos más prácticos que el solemne compromiso anglosajón de la Conferencia de Londres según el cual la soberanía de Italia en la zona B del territorio de Trieste era incuestionable y su administración por Yugoslavia meramente provisional.

LAS NEGOCIACIONES ENTRE ESPAÑA Y LA CEE

Aun dotado de escaso sentido del humor, el historiador del futuro no podrá por menos que sonreírse al cotejar los términos de la solemne Declaración de Helsinki y su aplicación práctica a España, apenas transcurridos dos meses de haberla firmado todos los países europeos. Pasando por alto la más que hiriente, grotesca, retirada de embajadores—que no demoraron reintegrarse a sus Embajadas—y dando al griterío de masas y desmelenamiento de los medios informativos su exacta dimensión—que es de ofensiva estrategia indirecta con medios no militares—, donde la distonía entre principios y hechos alcanzó su punto álgido fue posiblemente en la reunión del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, celebrada el 6 de octubre en Luxemburgo. Entre otras tareas, el Consejo tenía que discutir la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas, presidida por François Xavier Ortoli, para suspender las negociaciones con España sobre un nuevo acuerdo preferencial en materia de comercio.

En espera de que el historiador del futuro se sonría, el observador queda sumido en la perplejidad ante la «politización» de una cuestión de clara índole económica, que no rozaba la integración, adhesión o asociación de España a la CEE y sólo apuntaba a actualizar las cláusulas del Acuerdo suscrito en 1970, nada desfavorable para la que un comentarista galo calificó de «mercado de perras gordas». En efecto, la CEE es el primer proveedor de España con ventas que sumaron 219.000 millones de pesetas en los ocho primeros meses del año en curso, frente a ventas realizadas por España que sólo ascienden a 126.000 millones de pesetas en el mismo período. Pero hete aquí que

negociaciones basadas en lo económico y comercial pasan de pronto a fundamentarse en una cuestión de política interna del país negociador.

En la comentada reunión de Luxemburgo, una vez más se puso de manifiesto las divergencias existentes en el seno de la Comunidad. Mientras Dinamarca y Holanda, señaladamente, se desgañitaron para que se le negara a España el pan y la sal, que Italia y Gran Bretaña preconizaron coacción, pero prudente, Francia se mostró reticente a rizar el rizo de la Cruzada de las democracias occidentales. Incluso, por voz de su ministro de Asuntos Exteriores, señor Sauvagnargues, estimó acertadamente que el presidente de la Comisión de Comunidades Europeas, señor Ortoli, había sacado los pies de las alforjas, es decir, había traspasado los límites de su competencia, que es exclusivamente técnica. Para tener evidencia de este extremo, basta recordar la ironía con que el general De Gaulle arremetió contra los «eurócratas» de esa Comisión, negándose en redondo a tolerar que se entremetieran en la política de Francia, fuera ésta interior o exterior. Por tanto, mucho podría ironizarse en el caso de un país que no es miembro de esa CEE que, hoy por hoy y pese a todos los buenos propósitos, no es más que económica y que ni siquiera ha establecido una coordinada unidad en materia de economía. La reciente «guerra del vino» entre Francia e Italia —que no se ha resuelto— ilustra el aserto de que la CEE es campo de batalla de contradictorios intereses nacionales. Lo peregrino es que un asunto interno de país buen cliente pero ni miembro, ni adherido, ni asociado, después de muchos cabildeos en el Consejo de Ministros, haya logrado que todos se pusieran de acuerdo para «suspender las negociaciones con España», negociaciones que desde hace un año están en vía muerta. Estar en vía muerta o en suspenso es mera diferencia semántica.

En realidad, la decisión adoptada en Luxemburgo sólo perseguía un efecto coactivo de tipo político, por cuanto los intereses de los países de la Comunidad —lo mismo que los de España— apenas si han de verse afectados en lo inmediato por aquélla. Las relaciones comerciales con la CEE no tienen por qué interrumpirse, acogidas como están por el protocolo adicional firmado hace un año que expira el 1 de enero de 1976. Cabe preguntarse si en el caso de implicar una ruptura sin dilaciones de los intercambios comerciales —desde luego perjudicial para España— los ministros deliberantes en Luxemburgo la hubiesen adoptado, porque si los gobiernos europeos han de prestar oídos en su acción política a las demandas de su oposición —cuando no es la izquierda la que está en el poder, porque entonces canta otro gallo—, no es menos cierto que en todos ellos ejercen una incuestionable pre-

sión los grupos industriales, comerciales o financieros, que tienen intereses directos o indirectos en España. Tal eventualidad no se ha planteado. Precisamente por no plantearse ha prosperado la propuesta de la Comisión de los «eurócratas», que, aunque presidida por un francés, distó mucho en su postura de la moderada y moderadora del ministro galo de Asuntos Exteriores. Sería ingenuo caer en la creencia de «las simpatías a España» del actual gobierno de Francia. No simpatías, sino intereses son los que conforman la vida internacional. Vistas así las cosas, se justifica la postura de Francia, más exactamente de su gobierno, antes y durante el Consejo de ministros de la CEE.

El país vecino no desiste —por interés propio— de extender la CEE hacia el Sur, o sea, de incluir a España en el seno de la Comunidad, por ser necesario hacer contrapeso a los países que desplazan hacia el Norte su centro de gravedad, ese centro de gravedad político y económico que Francia se afana en ser. Por lo demás, en el ámbito de su política exterior, el presidente Giscard d'Estaing no ha renunciado a la política mediterránea, singularmente propugnada por su antecesor. Tal avalan sus sucesivos viajes a los países del Norte de África. La viabilidad de semejante proyecto requiere la participación de España, de indiscutible importancia geopolítica y geoestratégica. De ahí que Francia, en medio de la barahúnda luxemburguesa, no apoyara el acelerador de las indignaciones comunitarias y haya tendido a echar mano del freno. No ha logrado en lo inmediato su objetivo, que es no arrojar a España a las tinieblas económicas, pero sólo un irremediable pesimismo puede descartar que a corto plazo los demás miembros de la CEE reconsideren su negativa a negociar. El término «en suspenso» dará mucho de sí sin desdoro... Porque el interés los llevará a reconsiderar si la situación que han creado no supone mayor pérdida para la CEE que para España, cuyas relaciones con el Este crecieron en enero-septiembre de 1975: en un 55 por 100 las importaciones, sobre idéntico período de 1974, y en un 33 por 100 las exportaciones. La corriente comercial no se ha visto afectada por las agitaciones del Oeste: se ha prorrogado por un año el acuerdo comercial hispano-soviético suscrito por tres años. De otra parte, España sale en busca de nuevos horizontes económicos y comerciales, cual sugiere el viaje a Japón del ministro del Plan de Desarrollo. Quién sabe si a la postre una reorientación de la política económica de España no resultaría más beneficiosa que su integración en una Comunidad en largo proceso de ensamblamiento coherente, integración para la que el presidente del Consejo de Ministros de la CEE, Mariano Rumor, exigió en conferencia de prensa el traje de etiqueta de «una democracia a

la europea». No concretó si el modelo era la democracia de Italia o la de Portugal, a la que el Consejo concedió una ayuda urgente de 180 millones de dólares con un interés del 6,5 por 100, mientras el fijado para los países africanos, púdicamente clasificados «en vías de desarrollo», es del 9,5 por 100. Indudablemente, el historiador del futuro hallará materia para sonreír ante lo que parece la comedia de Europa, pero que es de hecho la tragedia de Europa.

EL VIAJE A CHINA POPULAR DEL DOCTOR KISSINGER

El 19 de octubre, el doctor Kissinger aterrizó en Pekín. Era su octavo viaje a China Popular desde 1971. El que realizó en noviembre de 1974 no le permitió cosechar éxitos espectaculares. En aquella ocasión no lo recibió el presidente Mao-Tse-tung, que acaso quiso expresar de este modo el enojo de Pekín por la atonía de las relaciones chino-norteamericanas, que siguen estancadas en el marco de la Declaración de Shangai.

Ciertamente, desde mayo de 1973 funciona en Pekín una «oficina de enlace» norteamericana. Otro oficina similar china funciona en Washington. Ambas son sucedáneos de Embajadas y se crearon teóricamente en compás de espera de un próximo establecimiento de relaciones diplomáticas normales a nivel de embajador. Pero al quedar vacante el año pasado el puesto de embajador de los Estados Unidos en Taipei, Washington nombró su sustituto sin aprovechar la oportunidad que se le brindaba para que aquella Embajada fuera cayendo en el olvido, se difuminara en el horizonte internacional y finalmente muriera de consunción. Tal era la maniobra que debía hacer Washington, pudo pensar Pekín, cuya paciencia no es sinónimo de acatamiento a situaciones que denuncia. Sin embargo, el nombramiento de un nuevo embajador en Taipei se justificaba ampliamente desde el punto de vista de los Estados Unidos. Un relajamiento de las relaciones con Taipei hubiera parecido preámbulo de la denuncia del tratado suscrito con la República China en 1954. Los países que gozan de garantías semejantes a las concedidas a Taiwan—unos quince, entre ellos Israel—hubieran puesto en tela de juicio la credibilidad de los Estados Unidos. Es decir, que la ruptura con Taiwan, por mucho que beneficiara las relaciones entre Washington y Pekín, tendría incalculables consecuencias en Asia y otras áreas del mundo. El máximo inconveniente de esa necesidad de mantener en pie el tratado con Taiwan es que Taiwan constituye cuestión que condiciona inexcusa-

blemente las relaciones entre Pekín y Washington. El último viaje del doctor Kissinger, preparatorio del viaje a China Popular del presidente Ford, apuntaba, por tanto, a armonizar los intereses nacionales norteamericanos y la decisión china de que las relaciones diplomáticas normales pasen por la ruptura con Taiwan, que se alza como un obstáculo en el camino de las relaciones chino-norteamericanas. Con todo, aun solamente establecidas a nivel «anormal», esas relaciones han supuesto una ventaja táctica para Washington en las negociaciones con Moscú. En cambio, no han propiciado sensibles progresos entre Pekín y Washington y viceversa.

China Popular no goza en los Estados Unidos de la cláusula de nación más favorecida. El contencioso derivado de la llegada al poder de los comunistas—196,8 millones de dólares de bienes norteamericanos incautados—sigue sin resolverse. Aunque no se ha suspendido la paulatina retirada de fuerzas norteamericanas estacionadas en Taiwan, los créditos militares destinados a ese país en el presupuesto de 1974 ascendían a 91 millones de dólares. Por otra parte, Taiwan ha abierto nuevos consulados en los Estados Unidos, en tanto que, pese a la crisis económica, no ha cesado de incrementarse el comercio entre esos dos países. Ello explica la apertura a primeros de año de una sucursal de la Chemical Bank en Taipei. Viene a sumarse a las ocho sucursales de poderosos bancos norteamericanos presentes en la capital. Lejos de mostrarse cautas, las inversiones norteamericanas fluyen hacia Taiwan, que tiene visos de paraíso en un mundo en crisis. Así, aparte de invertir en centrales atómicas juntamente con Japón, el capital norteamericano se interesa por las investigaciones petrolíferas a través de sociedades que efectúan prospecciones en el estrecho de Taiwan para localizar petróleo señalado por los satélites. Concretamente, la Gulf Oil inició en el pasado marzo sus prospecciones *off-shore* en competición con otras grandes empresas, que, ciertamente, no tienen prisa alguna por verse abocadas a actuar en el rígido marco de un rígido Estado socialista, suponiendo que éste las dejara actuar. Y el caso es que las inversiones petrolíferas, para que produzcan beneficios, han de hacerse a largo plazo. Como son a largo plazo la mayor parte de las inversiones que realizan las multinacionales presentes en Taiwan, señaladamente la Gatliff Oswego y la Associated Maritime Industries, que, en su día, dispondrán del 30 por 100 de los astilleros que se construyen en Kaohsiung.

Incuestionablemente, China Popular está al tanto del conjunto de las circunstancias políticas y económicas que sobre no impulsar los Estados Unidos a desentenderse de Taiwan los incitan a mantenerse

a su lado. Es una postura radicalmente contraria a su decisión de integrar a Taiwan en el ámbito de su soberanía, aunque fuera mediante una fórmula conciliatoria de territorio autónomo, si bien sujetándose a las reglas del juego que dicte Pekín. La agudeza y realismo chino descarta la eventualidad de que Pekín no comprenda que Washington tiene una recortada libertad de movimientos en lo que a Taiwan respecta. Ello no impide lógicas reacciones de malhumor, como la de solicitar trigo a Australia retirando el pedido hecho a los Estados Unidos, con los que mantiene un comercio moderado de 1.215 millones de dólares en 1974, es decir, tres veces menor que el comercio entre Taiwan y los Estados Unidos.

Este es, a grandes rasgos, el decorado de un nuevo acto de las relaciones chino-norteamericanas, excluyendo la cuestión del acercamiento (o «colusión») norteamericano-soviético y la Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación, aspectos de la política internacional que merecen la reprobación de China Popular. En ese decorado, Henry Kissinger ha discutido durante cuatro días con los dirigentes chinos, encabezados por el viceprimer ministro Teng Hsia-ping. En las conversaciones, que apuntaban a concretar el viaje del presidente Ford, al no removerse un ápice el obstáculo de Taiwan, pareció que no habría viaje, por cuanto al abandonar el secretario de Estado Pekín, el 23 de octubre, rumbo al Japón no se mencionó lo que había sido motivo fundamental de sus conversaciones con los dirigentes chinos, que, al parecer, sacaron otro tema delicado a colación: el del Tibet. En 1951, China Popular reintegró Tibet «a la madre patria». Lo anexionó, estimaron otros países, entre ellos los Estados Unidos. Según presenta los hechos el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, sin volver a mencionar el Tibet, los Estados Unidos «estimulan las actividades de los traidores tibetanos», al extremo de tolerar en territorio norteamericano una «Oficina del Tibet». Volver sobre un asunto viejo de casi veinticinco años y estimar, como lo hizo el viceprimer ministro Teng Hsia-ping, que con ese apoyo a los tibetanos los Estados Unidos cometen una «flagrante violación de la Declaración de Shangai», era clara manifestación de un endurecimiento de la postura de China Popular, quizá del disgusto originado por la Conferencia de Helsinki, pese a haber ejercido con tenacidad el oficio de Casandra. Sin embargo, la audiencia concedida por Mao Tse-tung al doctor Kissinger podía dulcificar las amarguras de la reticencia y reproches de Teng Hsia-ping y demás dirigentes chinos. En suma, al dejar Pekín, el propio doctor Kissinger no hubiera podido decir si su misión había tenido éxito o no. Primero se dio a conocer que el presidente Ford no viajaría

a China Popular. Posteriormente, se comunicó que tendría lugar, aunque el 1 de diciembre en lugar del 28 de noviembre, reduciéndose la estancia del jefe del Ejecutivo norteamericano a cuatro días, lo que supone un recorte de dos días. Todo ello es reflejo de las dificultades con que tropezó Henry Kissinger en las conversaciones de Pekín y el moderado entusiasmo chino por la visita de Ford. Estas premisas permiten adelantar que tal visita no arrojará un saldo positivo en cuanto a mejorar las relaciones entre Pekín y Washington. Queda sólo la posibilidad de un incremento del personal prestigio del presidente de los Estados Unidos. De cara a las elecciones presidenciales, es muy interesante. No lo es tanto en el ámbito de las relaciones internacionales.

LA AUTODETERMINACIÓN DE BELICE

Desde que finalizada la segunda guerra mundial empezó a soplar el viento descolonizador, no ha habido territorio extenso y poblado, fuera rico o pobre, cuya accesión a la independencia no haya originado tensiones, dificultades y problemas, cuando no sangrientos conflictos. Con alguna excepción, similar suerte han corrido, y corren, los territorios pequeños, escasamente poblados y carentes de apetecibles riquezas, que son las del subsuelo. En todo caso, tal sucede con Honduras británica, desde hace unos años llamada Belice, del nombre de la capital de ese territorio, de 21.268 kilómetros cuadrados poblado por unos 90.000 habitantes radicados singularmente en la costa. Realmente, el cambio de nombre se justifica por cuanto desde un punto de vista geográfico Belice es ajeno a Honduras, país con el que no tiene frontera alguna. En cambio la tiene con Méjico y, en particular, con Guatemala, que desde hace años reivindica ese territorio que, según su Constitución, «es territorio de Guatemala». Lo fue en tiempos de la presencia española y Gran Bretaña sólo apareció en esa región en virtud de una concesión para explotar la riqueza forestal de esa parte este de la península de Yucatán. Las vicisitudes sufridas por Guatemala desde que proclamó su independencia en 1821, entre ellas su anexión por Méjico y su posterior integración en las Provincias Unidas de Centroamérica hasta constituirse en 1844 en entidad nacional independiente, favorecieron la implantación de Gran Bretaña en esa región del Caribe. La primitiva concesión pasó a ser una colonia británica que ponía en solfa la doctrina de Monroe, excluyente de toda participación europea en los asuntos americanos, luego, en territorio americano. De hecho, Belice no es el único territorio americano

donde han campeado y campean países extraamericanos. Algunos no son siquiera dependencias o colonias, sino parte del territorio de una nación europea. Es el caso de las islas de Guadalupe y Martinica y Guayana, departamentos franceses. En cambio, en la Guayana holandesa o Surinam, la autonomía existente desde 1939 se ha visto orientada hacia la independencia, proclamada el 25 de noviembre de 1975.

Partiendo de la autonomía local, no otro que el camino de la independencia es el que Gran Bretaña ha señalado a Belice, pese a las reservas que opone el partido de la oposición (40 por 100 de los votos en las últimas elecciones), a una independencia a corto plazo, mientras que el partido con predominio en el Consejo ejecutivo la desea en lo inmediato. Esa orientación ha dado pábulo a la vieja reivindicación guatemalteca, singularmente agudizada a principios de noviembre, al extremo de que el ejército de Guatemala incrementó sus fuerzas en la frontera con Belice y el gobierno procedió a una movilización política y hasta militar. En defensa de la futura independencia de ese territorio, Gran Bretaña replicó enviando equipo pesado, blindados, aviones y, por supuesto, unidades de su ejército. Belice reaccionó con una gran manifestación para celebrar la presencia de las tropas británicas y expresar su repulsa por las «amenazas guatemaltecas», al tiempo que confiaba en la resolución que adoptara la IV Comisión a la que Gran Bretaña había presentado la cuestión.

La resolución fue favorable a la autodeterminación de Belice, y el 21 de noviembre la Asamblea General de la ONU dejó sentenciado el futuro de ese territorio. Por 101 votos a favor, 12 en contra y 13 abstenciones, acordó que todos los Estados respetaran el derecho del pueblo de Belice a la autodeterminación. Por tanto, rechazó de plano los intentos de Guatemala por reintegrar ese territorio a la soberanía nacional, complaciendo al tiempo la aspiración a poner término al colonialismo y ocupación de territorios americanos por países extracontinentales, aspiración formulada en particular en la reunión de Cancilleres de Río (1947) y en la IX Conferencia Americana de Bogotá (1948). En aquella Conferencia se creó la llamada Comisión de territorios ocupados que, por cierto, no fue del agrado de los Estados Unidos que todavía no habían convertido a Puerto Rico en Estado asociado.

En suma, por justa que sea su reivindicación, pocos recursos están al alcance de Guatemala frente a la ONU que, en este caso, ha aplicado a rajatabla la doctrina de la autodeterminación. La ha aplicado enérgica y rápidamente, como era el deseo de Gran Bretaña y los Estados

Unidos favorecidos por la adecuación de su conveniencia a los principios onusianos de justicia descolonizadora. Sin necesidad de efectuar maniobras dilatorias, invocar neutralidades o apelar a otras tretas salió triunfante la autodeterminación de Belice. Era hacer caso omiso de las razones invocadas por Guatemala. Es bien sabido: «el que no tiene padrino no se bautiza».

No es la riqueza de Belice —forestal y agrícola— la que ha movido el interés británico y norteamericano por su independencia antes que por la reivindicación de Guatemala, sino factores estratégicos. Son factores no ajenos a ciertas inhibiciones en determinadas descolonizaciones. En efecto, Belice es elemento de la seguridad de los Estados Unidos en el Caribe, donde las bases aéreas de Puerto Rico, Panamá y Trinidad constituyen línea de defensa de las campos petrolíferos de Venezuela, las refinerías de Curazao y Arube, así como del vulnerable Canal de Panamá y sus sistema de esclusas. Lo que pudiera suceder en Guatemala o Méjico tendría repercusiones en los demás países del área. De ahí el cuidado de asegurarse la eventual y excelente base operativa de un Belice independiente, pero no por ello carente de vínculos derivados de su anterior situación colonial, dado en particular sus condiciones económicas y su reducida población.

El remedo de «marcha verde» que planean determinados sectores guatemaltecos dudosamente surtiría el efecto de que Belice entrara a ser parte del territorio de Guatemala. De por sí, las marchas de voluntarios pacíficos, cualquiera que sea su color, no logran resultados. Es la conveniencia política, estratégica y eventualmente económica de países que no las organizan, pero las toleran y secretamente las alientan, la que lleva al éxito. Guatemala no cuenta con los Estados Unidos ni tampoco con Gran Bretaña. A resignarse toca, singularmente cuando se ha invocado el principio de la autodeterminación, muy propio para conseguir el voto entusiasta de los consecuentes con los principios de la ONU, que suelen ser los más, pero no los más poderosos.

LA BICÉFALA INDEPENDENCIA DE ANGOLA

Pocos países han accedido a la independencia en circunstancias tan dramáticas, confusas y de inquietante futuro como Angola el 11 de noviembre, fecha fijada tiempo ha por Portugal para desentenderse de ese territorio en el que estaba presente desde hacía casi cinco siglos. En suma, la decisión de Portugal equivalía a señalar con antelación el momento en que los angoleños divididos en tres partidos,

movimientos o bandos podrían campar por sus respetos y actuar a su mejor saber y entender. No aguardaron ese momento para enzarzarse en disputas y sangrientas luchas. Lisboa trató de mediar entre esas organizaciones rivales, más por motivos personales y tribales que de doctrina política y económica, aunque el MPLA se arrojó en un marxismo-leninismo algo *sui generis* y el FLNA y UNITA propugnen una democracia de tipo occidental. Reunidos los respectivos dirigentes, Agostinho Neto, Holden Roberto y Jonas Sawimbi, de los consejos y reconveniones lusas surgió el acuerdo de Alvor o Penina: la constitución de un gobierno provisional tripartita. Parecía resuelto el problema de la transmisión de poderes, facilitado en Mozambique y Guinea-Bissau por la existencia de un solo movimiento de liberación, el FRELIMO y el PAIGC, respectivamente. El buen funcionamiento de aquella troika fue flor de un día, por cuanto cada partido mantuvo para sus adentros el firme propósito de ser el único en alzarse con el santo y la limosna de la independencia de Angola. Y se produjo la ruptura, singularmente entre el MPLA y el FLNA seguida de choques armados. Inicialmente, UNITA, que Portugal apoyaba discretamente hasta el 25 de abril de 1974, se mantuvo a la expectativa, es decir, no participó con las armas en el enfrentamiento haciendo de fiel de la balanza. Tal vez hubiera prestado oídos a Agostinho Neto de haberle ofrecido éste, en contrapartida de una alianza, algunas carteras en el gobierno de Luanda. No lo hizo. Los éxitos logrados por el MPLA en septiembre, que le llevaron a dominar en 12 provincias de la región central de Angola, permitían prescindir de aliados. Es más, el MPLA arremetió contra UNITA instalado en el Sur. Así en lugar de concentrar sus fuerzas frente al FLNA, las dispersó, debilitando su posición en Luanda y los grandes centros urbanos. Aunque imperante en la región fronteriza con Zambia y Africa del Suroeste o Namibia, Jonas Sawimbi se sintió solo ante el peligro de victoria indiscutible del MPLA. Otro tanto debió de estimar Holden Roberto afincado en el norte de Angola fronterizo con Zaire, su aliada. Los dos movimientos, reflejados de la etnia de los umbundu del Sur (40 por 100 de la población angoleña) y los bakongo del Norte, se aliaron. Entonces se cambiaron las tornas para el MPLA que, al proclamar la independencia ciertamente dominaba en la capital Luanda, pero en una Luanda privada de agua por estar sometida a la presión de las fuerzas militares aliadas que habían destruido la estación de bombeo. Simultáneamente a la proclamación hecha por Agostinho Neto, el presidente del FLNA, Holden Roberto, proclamó la independencia en

su cuartel general de Ambriz, a unos 100 kilómetros de Luanda, en espera de establecer un gobierno en Huambo, ex Nueva Lisboa. Ya estaba en pie la independencia bicéfala de Angola.

De estar circunscrita semejante situación al área de Angola, por muy de lamentar que fuera desde un punto de vista humanitario, carecería de relevancia política. Antagonismos internos, conflictos de raíz tribal y luchas por el poder son monedas con que la mayoría de los países africanos descolonizados pagan su independencia. Desgraciadamente, en Angola tienen arte y parte intereses de toda índole, africanos unos, y, extraafricanos, otros. Estos últimos son la expresión localizada de políticas y estrategias a escala mundial. Es lo que confiere singular importancia a cuanto acaece en Angola y explica las ayudas que ambos bandos reciben del exterior, pues cada uno de ellos está adscrito directa o indirectamente a uno de los supergrandes y sus conmillitones. Ello explica asimismo que los «progresistas» general Gonçalves y almirante Coutinho apoyaran al MPLA, mientras que, al parecer, el general Spínola, entonces en el poder, y el general Mobutu, en su encuentro en la isla Sal, llegaron al acuerdo de autorizar a Holden Roberto a cruzar la frontera de Zaire con un gran ejército comprensivo de voluntarios para poner jaque al MPLA. En suma, tanto la riqueza del subsuelo de Angola —¡ay! imprescindibles materias primas— como su posición estratégica fomentan las ayudas foráneas a los bandos enfrentados. En efecto, una victoria decisiva del MPLA supondría una nueva etapa en el paciente empeño de la URSS hacia África del Sur, objetivo de la acción soviética en el África subsahariana debido a su interés por predominar en el Océano Índico. De ahí que por Zaire interpuesto los Estados Unidos, ciertos países de la Comunidad Europea y, por vía de su antisovietismo militante, China Popular, estén al lado del binomio FLNA-UNITA. Que una vez fracasada la fórmula «troika» y la mediación de la OUA semejantes implicaciones en la guerra civil de Angola hacen correr riesgos de enfrentamiento generalizado, sin ser exactamente una hipótesis, parece poco probable. En todo caso, sería un hecho nuevo en esa África solo fértil en luchas internas. En cambio, no es tan improbable que una intervención directa del Congo-Brazzaville «popular y democrático» en favor del MPLA provocara la intervención de Zaire, volcada al FLNA. Lo que no parece inminente es la rotunda victoria militar de ninguno de los contendientes. Dotados de toda clase de material bélico, en parte de tan difícil manejo que requiere la presencia de «asesores», ambos marcan el paso pese a sus armas y sus asesoramientos e in-

cluso del poco aclarado refuerzo que procedente de Namibia lucha en las filas de UNITA. Sin embargo, no parece propio hablar de una eventual «vietnamización» de Angola. Es muy dudoso que los Estados Unidos, que se metieron de hoz y de coz en el avispero de Vietnam, vuelvan a las andadas. Es más dudoso aún que la URSS renuncie a su método de tirar la piedra y esconder la mano. Sin pretender vaticinar los acontecimientos, siempre imprevisibles en un alto porcentaje que se hurta a los cálculos de la futurología, es de presumir que, atizado desde fuera, el fuego de Angola pueda arder largamente, o sea ser largamente uno de esos diversos puntos conflictivos que, en este mundo donde al parecer hay paz, desempeñan el papel de fuentes de la vieja terapéutica.

LA CONFERENCIA DE RAMBOUILLET

El 15 de noviembre se inició en Rambouillet la conferencia convocada por el presidente Giscard d'Estaing en el pasado julio con vistas a que las por él tituladas «democracias industriales» considerasen los medios adecuados para hacer frente a la mayor de las crisis económicas que ha padecido el mundo desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, sólo se había previsto la asistencia de cinco países: Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, República Federal y Japón, pero en la reunión preparatoria de Washington del mes de octubre se acordó que el pequeño círculo se ampliara para dar cabida a Italia. La insistencia de los Estados Unidos no consiguió que se incluyera a Canadá. Tampoco estaba representada la CEE de modo unitario, pese a constituir un hecho institucional y económico incuestionable. Aldo Moro, actual presidente del Consejo de la CEE, no asistía a la conferencia como tal, sino en calidad de representante de su país. Por tanto, un concepto selectivo y hasta discriminatorio informó la convocatoria gala, con el inconveniente de que los acuerdos a que se apuntaba en Rambouillet podrían ignorarlos olímpicamente los excluidos miembros de la CEE.

El problema no se planteó. Con todo el respeto debido al areópago de los seis Jefes de Estado o Gobierno de la Conferencia de Rambouillet, una vez finalizada se llega a la conclusión de que fue más el ruido que las nueces. El ruido estuvo a cargo del histórico y grandioso palacio de Rambouillet, las negociaciones, los discursos y declaraciones, sin que faltaran, por supuesto, los buenos propósitos y mejores intenciones. Las nueces, es decir, los resultados prácticos, tangibles, ope-

rantes, realmente fueron tan escasos que no se estimó la conveniencia de facilitar un comunicado final, eventualidad que se había previsto de antemano. Todo quedó en una llamada «Declaración de Rambouillet» en la que, se dijo, quedaba plasmado el «espíritu de Rambouillet». De unos años a esta parte, ¡cuántos «espíritus» de encuentros a diverso nivel sepultados en el olvido! Tantos como «hechos históricos» que nadie recuerda. Esa declaración sustituía el comunicado, por cuanto, como aclaró un miembro de la representación francesa, «se comunican decisiones y se declaran intenciones». Por tanto, no es petulancia estimar que la Conferencia de Rambouillet fue conferencia de intenciones. Fue también conferencia de un reconocimiento unánime de evidencias: la existencia de una grave crisis económica que atosiga el mundo; la auténtica calamidad que representa el paro y sus incidencias en la vida social; la inflación, terrible mal que corroe las economías nacionales y particulares. Contra todo ello hay que luchar de consuno. La interdependencia de las economías impone adoptar medidas de común acuerdo, «todas las medidas precisas». A Perogrullo no se le hubiera ocurrido otra fórmula. Ha sido la propugnada por los reunidos en Rambouillet. Todos estuvieron de acuerdo sobre el particular. Lo que no han concretado son las medidas susceptibles de aliviar los males señalados con infalible diagnóstico. Este fallo resta relevancia a la conferencia, por mucho que se haya cargado el acento en la «cooperación», que Takeo Miki adjetivó «creadora», fallo tal vez achacable a que por estar en puertas la Conferencia Norte-Sur, los seis de Rambouillet hubieron de reservar sus iniciativas en espera de los resultados del diálogo entre países industrializados, países productores de materias primas y países que son en suma «pobres de solemnidad».

Sin embargo, como lo totalmente negativo o totalmente positivo rara vez se da en la realidad concreta, en Rambouillet se ha registrado un acercamiento franco-norteamericano en materia monetaria. Francia ya había desistido desde hace tiempo del combate del general De Gaulle contra el dólar, y los Estados Unidos han renunciado a mantener en vigor las decisiones de Bretton Woods o del dólar-rey que se imponía sin discusión en el mundo. De ahí que Giscard d'Estaing no insistiera en el afán de exigir la cuenta al sistema de las paridades monetarias fijas, ni los Estados Unidos se empeñaran en defender las fluctuaciones del dólar, que tienen repercusiones desfavorables en las economías mundiales. El chalaneo franco-norteamericano enriqueció el vocabulario financiero con un nuevo y extraño

término: la «viscosidad». Traducido al lenguaje inteligible, significa la fluctuación monetaria limitada y contralada. La medida se considera equivalente a punto de partida para el relanzamiento económico. El tiempo dirá si ese esperado y hasta impulsado relanzamiento no generará un incremento de la inflación.

Sin esperar a que el tiempo aclare esa duda, lo que sí puede decirse es que la Conferencia de Rambouillet no aporta elementos sustanciales para edificar el nuevo orden económico internacional, de la que Francia pretende ser destacado artífice. Es evidente que el vasto, complejísimo y contradictorio problema de la economía mundial no cabía en los límites de los conciliábulos e incluso de los acuerdos de los llamados «seis ricos oficiales», es decir, de seis países y su circunstancia específica. Pensar que podía alcanzarse esa ambiciosa meta era irrealismo. De tal modo se le impuso lo desmedido del empeño de hallar un común denominador para la economía occidental, primer paso para reorganizar la economía mundial, extremos que motivaron la convocatoria de la Conferencia de Rambouillet, que el propio presidente Giscard d'Estaing reconoció su modesto alcance al decir: «Lo más importante es que esta reunión se haya celebrado.» No es mucho. Por su parte, expresando el punto de vista de los Estados Unidos, centro de gravedad de la Conferencia, el doctor Kissinger declaró a finales de noviembre que «los dirigentes de las principales democracias industriales concluyeron que su principal objetivo era poner fin al desempleo». No es de admirar que todos estuvieran de acuerdo en cuanto a este objetivo. Lo compartido del propósito es, sin duda, factor de optimismo. La ausencia de precisiones en cuanto a medios para convertirlo en realidad mueve al escepticismo, a menos de que surjan los economistas milagrosos que den con ellos. Hasta el presente, no se tiene noticias de su existencia.

LA CRISIS DEL LÍBANO

El gozo suscitado en el mundo occidental por el acercamiento entre los Estados Unidos y Egipto, así como por el acuerdo egipcio-israelí, cuales garantías de que la paz en el Cercano Oriente iba por buen camino, corre el riesgo de caer en el pozo de la crisis del Líbano. La misión mediadora que, encabezada por el ex ministro de Asuntos Exteriores de Francia, señor Couve de Murville, partió para Beirut el 19 de noviembre, es prueba inequívoca de que París estima

grave la situación existente en ese país árabe de su predilección tradicional, al que el general De Gaulle tranquilizó después del bombardeo israelí de su capital en 1968, diciendo: «Francia no se mantendrá indiferente ante una amenaza contra el Líbano.» Entonces sólo Israel amenazaba al Líbano. Las cosas eran bastante sencillas. Hoy en día, la misión francesa se encuentra ante una situación sumamente compleja de guerra civil e injerencias foráneas indudables, por muy solapadamente que actúen.

Una consideración simplificada del problema llevaría a la deducción de que los cristianos, cuya máxima representación combativa son las falanges libanesas o las *Kataeb*, de Pierre Gemayel, se enfrentan por motivos religiosos con los musulmanes de ese país biconfesional, cuya prosperidad y equilibrio se han presentado durante años como paradigma de democrática convivencia susceptible de darse en la Palestina árabe, judía y cristiana que propugna la OLP. La tesis de la armoniosa coexistencia en el Cercano Oriente de tres grupos religiosos en un marco nacional único se derrumba estrepitosamente. No le viene mal a Israel. Pero el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes es sólo la parte visible del iceberg de problemas políticos, económicos, sociales y demográficos existentes en el Líbano. En su gran mayoría, los cristianos están mejor situados económica, social y culturalmente. A grandes rasgos, los musulmanes, los refugiados palestinos y las minorías armenia y drusa constituyen la masa popular, en ocasiones proletaria. Los 1.000 dólares per cápita atribuidos al Líbano es mero resultado de la división del PNB por el número de habitantes. No refleja la realidad social de ese país de economía liberal un poco triunfalista, donde tantos capitales lícitos e ilícitos tenían cobijo. No en vano se ha considerado que el Líbano era «la Suiza del Medio Oriente». Al sonar la hora de la independencia (1943) y suscribirse el Pacto Nacional, la población cristiana superaba claramente la población musulmana. Todavía en 1964 había en el Líbano cerca de 800.000 cristianos y sólo algo más de medio millón de musulmanes. En diez años, el crecimiento vegetativo de los musulmanes y la llegada de masas de palestinos refugiados ha alterado la relación de fuerzas. Los musulmanes—libaneses y palestinos—constituyen una mayoría, en gran parte depauperada y reivindicadora de más participación en las tareas del Estado y las riquezas nacionales. Es decir que, en términos generales, los musulmanes—con excepciones—se sitúan a la izquierda de todos los matices; los cristianos—también con excepciones—, a la derecha. Las tropas de cho-

que cristiano-derechistas son las *Kataeb*. Varios partidos o grupos luchan unidos en la izquierda. Inicialmente, fue el Partido Social Progresista, de Kamal Jumblatt, el que llevó la voz cantante. Pero al correr del tiempo ha surgido una nueva izquierda, que trata de organizar y dominar la Organización de Acción Comunista en el Líbano, o sea un comunismo que tiende a deglutir el progresismo de Jumblatt.

En un país cuya clave no fuera el equilibrio confesional, el Ejército podría haber dado al traste con los bandos enfrentados, apoyando las decisiones del Gobierno y restableciendo el orden nacional. Pero el Gobierno libanés—que sigue siendo biconfesional—no puede echar mano de las fuerzas armadas, mayoritariamente cristianas, como cristiano es su jefe supremo. Pondría al rojo vivo los ánimos musulmanes, incluso de los que están en el poder, que las acusaría de partidismo cualquiera que fuese su actuación. Es decir la trágica situación de los sucesivos Gobiernos originados y gastados por esa grave crisis. También es trágica la situación de los propios jefes de los bandos enfrentados, que, en ocasiones, dan la impresión de verse rebasados por sus huestes. De no ser así, no se justificarían tantas violaciones de alto el fuego acordados. En cuanto a los palestinos que luchan junto a los libaneses de confesión musulmana, se apartan de la misión que les encomendó Yasser Arafat cuando, en el pasado septiembre, de acuerdo con el Gobierno libanés, envió unidades regulares para mantener el orden, evitar el desmembramiento del Líbano y conservarlo a toda costa. Ciertamente es que Yasser Arafat sabe mejor que nadie que diversas facciones o grupos palestinos, teóricamente encuadrados en la OLP, se hurtan a su autoridad y hacen caso omiso de sus llamamientos en pro de la «concordia nacional». Porque, indudablemente, la situación actual, y más el eventual desmembramiento del Líbano o el conflicto con Israel, animado por el desbarajuste reinante, es muy desfavorable para la OLP. Comparte este criterio Siria, temerosa de una arremetida israelí, que la implicaría militarmente, con riesgo de salir malparada. Desgraciadamente, los esfuerzos sirios para restablecer la paz han resultado tan baldíos como los desplegados por el Vaticano para acordar los bandos enfrentados. Concordia y acuerdo requieren bases aceptables y aceptadas por ambas partes y un auténtico y común deseo de salvar la unidad y hasta la existencia del país.

Sin poner en duda el patriotismo de los libaneses de los dos bandos, se evidencia que la ceguera partidista—más que religiosa—les

impide ver la pendiente por la que se desliza ese país, cuya economía, otrora floreciente, se ha destruido: los capitales huyen, las filiales de los grandes Bancos mundiales se trasladan a Egipto o Grecia; se registra un éxodo de comerciantes, de profesionales y dirigentes de empresas. Todo sugiere que a la fase de destrucción puede suceder una fase de revolución. Por lo menos tal teme el dirigente del Bloque Nacional, de la derecha moderada, Raymond Eddé, al preguntar recientemente en el Parlamento: «¿Existe un plan para suscitar una revolución? Y, llegado el caso, ¿a quién aprovechará esa revolución?»

Para el observador, parece que, en primer término, a la URSS. El terreno perdido en Egipto y asimismo Iraq —una vez reconciliado con Irán—, y no tan firme en Siria como sería de desear, confiere singular importancia a la cabeza de puente libanesa. Porque si de algo puede estar seguro el mundo occidental y su adalid norteamericano es que para la URSS su presencia en el Cercano y Medio Oriente es de interés vital. Luego pone y pondrá por obra todos los medios para mantenerla, cuando menos. Como también es de interés vital para Israel y también para los Estados Unidos que el Líbano vuelva a las plácidas aguas por las que ha navegado durante treinta años largos de paz y liberalismo. Que cada país con interés en la evolución en su provecho de la guerra civil libanesa arrime el ascua de un bando a su sardina, es lógico e inevitable. Lo que no se ve claramente es que la sardina de la mediación que el señor Couve de Murville llevaba en su equipaje encuentre para arrimarse otra ascua que la gubernamental y su simpatía por Francia. En todo caso, a finales de noviembre, no se había visto.

CARMEN MARTÍN DE LA ESCALERA